



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN

JULIACA

“Capital de la Integración Andina”

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 330 – 2022-MPSR-J/GEMU.

Juliaca, 04 de julio de 2022

VISTOS:

El recurso de apelación con registro N° 2019-45231, Informe N° 083-2019 MPSR-J/GJQT-GEFC, Dictamen Legal N° 571-2019-MPSR/J/GAJ, y demás actuados que la conforman, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del estado y canales de participación vecinal y promotores de desarrollo local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual se encuentra concordado con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Orgánica de Municipalidades, debiendo acotarse que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico nacional;

Que, el artículo 46 de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, establece que “Las normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes (...).”

Las ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas por la infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas de multa en función de la gravedad de la falta (...). Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión de autorizaciones de licencias, clausura (...)” siendo que el proceso de fiscalización y Control Municipal se inicia de oficio o en atención a la formulación de denuncia de cualquier ciudadano, entidades públicas o privadas de carácter permanente dentro de la circunscripción territorial, conforme al artículo 4 y 6 de la Ordenanza Municipal N° 010-2011 Ordenanza Municipal que establece la imposición de sanciones inmediatas a establecimientos que funcionan sin contar con licencia municipal de funcionamiento y que afectan el orden público, las buenas costumbres y la seguridad ciudadana, la Gerencia de Fiscalización y Control tiene la atribución de iniciar y conducir el procedimiento sancionador en calidad de órgano de instrucción y de resolución.

Que, en acción de control municipal realizada se levanta el Acta de Fiscalización N° 013-2019 de fecha 14 de febrero de 2019, al constatarse en un operativo inopinado sobre el funcionamiento del local denominado KARAOKE DISCO BAR CLASE ZONA, ubicado en el Jr. Lambayeque N° 111, de la ciudad de Juliaca, sin autorización de Licencia Municipal de Funcionamiento, por lo que se procedió a emitir la Resolución de Sanción N° 062-2019-MPSR-J/GEFC de fecha 31 de mayo de 2019, que Resuelve: La clausura definitiva y pegado de afiche en observancia al artículo 7 incisos 1, 2 y 3 de la Ordenanza Municipal N° 010-2011, así como la imposición con multa de 10 UIT equivalente a S/. 42,000.00 soles, la misma que es impugnada mediante Recurso de reconsideración.

Que, a través de la Resolución Gerencial N° 043-2019-MPSR-J/GEFC, de fecha 05 de agosto de 2019, se resuelve: Declarar Improcedente el recurso de reconsideración, interpuesto por Claudio Yony Quispe Quispe, contra la Resolución de Sanción N° 062-2019-MPSR-J/GEFC de fecha 31 de mayo de 2019.

Al respecto son sujetos de control y sanción municipal las personas naturales, jurídicas, entidades públicas e instituciones privadas y en general **todo aquel, por mandato imperativo están obligadas a cumplir la ley y las normas municipales dentro de la jurisdicción del distrito de Juliaca.** Las sanciones son de carácter personal, no obstante, cuando el cumplimiento de las disposiciones corresponda a un conjunto de personas estas responden en forma solidaria (...).

Que, la Ordenanza Municipal N° 010-2011 Ordenanza Municipal que establece la imposición de sanciones inmediatas a establecimientos que funcionan sin contar con licencia de funcionamiento municipal y que afectan el orden público, las buenas costumbres y la seguridad ciudadana, expresa en el artículo 7 sobre la Clausura definitiva, Incautación y Multa.

El artículo 218 del TUO de la LPAG aprobado mediante D.S. N° 004-2019-JUS, establece que los recursos administrativos son de reconsideración, apelación, los que deben ser interpuestos perentoriamente dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del acto administrativo a impugnar, requisito que cumple el recurso de apelación presentado con firma de letrado de fecha 30 de setiembre de 2019, cuyo cuestionamiento recae sobre la Resolución Gerencial N° 043-2019-MPSR-J/GEFC que confirma la Resolución de Sanción N° 062-2019-MPSR-J/GEFC de fecha 31 de mayo de 2019, emitida por la Gerencia de Fiscalización y Control, que fuera notificada el día 26 de setiembre de 2019; **es decir dicho recurso amerita ser admitido para evaluación.**

Que, el administrado cuestiona en su recurso de apelación señalando; que con fecha 31.05.2019 se había emitido la Resolución de Sanción N° 062-2019-MPSR-J/GEFC, el mismo que se notifica el 06.06.2019, tomando como base el Acta de Fiscalización N° 013-2019 de fecha 14.02.2019.

Dicha resolución de sanción ha sido emitida desde la fecha de intervención de fecha 14.02.2019 hasta la emisión de la resolución de sanción LUEGO DE HABER TRANSCURRIDO MAS DE TRES MESES CON 15 DIAS, y hasta la



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN

JULIACA

“Capital de la Integración Andina”

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

notificación de dicha resolución, emitida fuera del plazo establecido en la Ordenanza Municipal 10-2011, luego de haber transcurrido más de tres con 23 aproximadamente.

La Ordenanza Municipal 10-2011, establece en forma clara que ante la contravención de las disposiciones de dicha normativa municipal, la sanción es en forma inmediata, y no transcurridos 3 meses y 23 días como se pretende realizar con la emisión y notificación de la Resolución de Sanción N° 062-2019-MPSR-J/GEFC, a sabiendas de la propia municipalidad que mi establecimiento cuenta con SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO los cuales se encuentran vigentes, y tiene carácter de resolución conforme lo establece el **D.S. N° 004-2019-JUS, artículos 36 y 37**. Y demás fundamentos facticos que se encuentran más ampliamente descritos en su recurso de apelación.

Sobre el tema que nos ocupa debemos señalar, que la infracción impuesta al apelante es porque en el bien inmueble de su propiedad, sea constatado el funcionamiento de un negocio denominado Karaoke Disco Bar Clase Zona, ubicado en el Jr. Lambayeque N° 111 sin contar con licencia municipal de funcionamiento.

Conforme a la LOM, las municipalidades tienen competencia de otorgar licencias de funcionamiento por cuanto tiene que revisar y verificar que el funcionamiento de un negocio que se realice se ajuste a las normas del bien común y la paz social. Veamos:

ARTÍCULO 74.- FUNCIONES ESPECÍFICAS MUNICIPALES

Las municipalidades ejercen, de manera exclusiva o compartida, una función promotora, normativa y reguladora, así como las de ejecución y de fiscalización y control, en las materias de su competencia, conforme a la presente ley y la Ley de Bases de la Descentralización.

ARTÍCULO 78.- SUJECCIÓN A LAS NORMAS TÉCNICAS Y CLAUSURA

El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y con sujeción a las normas técnicas sobre la materia.

Las autoridades municipales otorgarán las licencias de construcción, bajo responsabilidad, ajustándose estrictamente a las normas sobre barreras arquitectónicas y de accesibilidad. Asimismo, pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o servicios cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de las normas reglamentarias o de seguridad de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecindario.

En efecto, las municipalidades provinciales gozan de la facultad de normar, regular y otorgar licencias de funcionamiento, así como realizar su fiscalización dentro de su distrito. La facultad de fiscalización, conlleva a la posibilidad de emitir sanciones contra los administrados que incumplen los dispositivos municipales

ARTICULO 86.- PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

1.- Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:

- 1.2. Flexibilizar y simplificar los procedimientos de obtención de licencias y permisos en el ámbito de su jurisdicción, sin obviar las normas técnicas de seguridad.

IGUALMENTE, MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL N° 010-2011 ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE LA IMPOSICION DE SANCIONES INMEDIATAS A ESTABLECIMIENTOS QUE FUNCIONAN SIN CONTAR CON LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO Y QUE AFECTAN EL ORDEN PUBLICO, LAS BUENAS COSTUMBRES Y LA SEGURIDAD CIUDADANA.

ARTICULO 2.- FINALIDAD DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

La Municipalidad Provincial de San Román, conforme lo dispone el ordenamiento jurídico vigente y dentro de la jurisdicción en la que ejerce autoridad, tiene potestad y obligación de otorgar licencia de funcionamiento para la realización de actividades económicas, dentro de los plazos y formalidades establecidos por las normas pertinentes, con el propósito de verificar el cumplimiento de normas técnicas de seguridad, salubridad y ordenamiento, a fin de garantizar que el negocio, establecimiento o giro a desarrollarse no atente contra las normas que interesan al orden público, a las buenas costumbres y a la seguridad ciudadana, y no afecte, por consiguiente, la paz pública o ponga en peligro la salud y la integridad física de los ciudadanos.

ARTICULO 4.- OBLIGACION DE OBTENCION PREVIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.

A partir de la vigencia de la presente Ordenanza Municipal y en concordancia con las normas legales correspondientes, ninguna actividad económica que pueda afectar el orden público, las buenas costumbres o la seguridad ciudadana, cualquiera sea su dimensión espacial o giro, puede funcionar sin la obtención previa de licencia municipal, bajo pena de la aplicación de las sanciones administrativas pecuniarias y no pecuniarias que se establecen.

Conforme a Ley, no es de aplicación para las solicitudes de licencia de funcionamiento referidos en el párrafo anterior, el silencio administrativo positivo.

De manera que, el apelante al permitir el funcionamiento en su propiedad el establecimiento comercial denominado KARAOKE DISCO BAR CLASE ZONA en el inmueble ubicado en el Jr. Lambayeque N° 111 ha infringido lo estipulado en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Ordenanza Municipal N° 10-2011, el mismo que regula los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas sin licencia municipal que afectan el orden público, afectan las buenas costumbres, afectan la seguridad ciudadana, ponen en riesgo la salud, ponen en riesgo la integridad de las personas, ponen en peligro la propiedad pública y los que ponen en peligro la propiedad privada.

Del mismo modo el apelante en la formulación del Recurso de Apelación refiere que su establecimiento cuenta con SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, los cuales se encuentran vigentes, sobre dicho argumento debemos señalar que mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 072-2019-MPSR/J/GPDE de fecha 21.01.2019, se ha declarado improcedente lo solicitado por el administrado Claudio Yony Quispe Quispe, quien solicita Licencia de Funcionamiento para el giro y/o actividad “ESPARCIMIENTO Y RECREATIVAS” y nombre comercial “KARAOKE DISCO BAR ZLASE ZONA”, ubicado en el Jr. Lambayeque N° 111 cercado de esta ciudad de Juliaca.

Que, siendo que el administrado habría omitido tener en cuenta las formalidades establecidos por ley; además teniendo en cuenta que podrán ser sancionadas las conductas cuyos elementos constitutivos se adecuen plenamente a las infracciones previstas expresamente en la Ordenanza Municipal N° 010-2011 y de conformidad





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN

JULIACA

“Capital de la Integración Andina”

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

con la señalado en la Opinión Legal N° 571-2019-MPSRJ/GAJ, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, emite opinión legal precisando: El administrado sustenta su apelación en el sentido que la RESOLUCION DE SANCION N° 062-2019-MPSRJ/J/GEFC, fue expedida luego de haber transcurrido más de tres meses con 23 días aproximadamente de haberse expedido el Acta de Fiscalización N° 13-2019 de fecha 14.02.2019, por lo que sería nulo, al respecto se debe indicar lo siguiente: a) Si bien es cierto que la Expedición de la RESOLUCION DE SANCION N° 062-2019-MPSRJ/J/GEFC fue expedida muchos días de haberse expedido el Acta de Fiscalización, ello no implica que dicha resolución sea declarada nula, pues la Ordenanza Municipal N° 010-2011 en su artículo 8 numeral 2 no dispone que el hecho de no expedirse en el acto la Resolución de Sanción acarrea la nulidad de la Resolución de Sanción que se imponga, ni mucho menos establece que por dicho motivo debe declararse nulo el Acta de Fiscalización (...); b) Además como consecuencia del Acta de Fiscalización N° 13-2019 es que se expide la RESOLUCION DE SANCION N° 062-2019-MPSRJ/J/GEFC, ahora de los actuados se advierte que el administrado no impugno el Acta de Fiscalización, por lo que es infundada pretender la nulidad de un acto administrativo que es accesorio del principal; c) En relación a los formatos con registro N° 028112-2019 (folios 57 y 58) del 21.01.2019 y 001648-2019 (folios 07 y 08) del 14.01.2019 se debe indicar que en todo caso el silencio administrativo aplicable sería el Negativo mas no el Positivo, pues lo solicitado por el administrado como el la Licencia de Funcionamiento a Plazo Indeterminado afecta al interés público (pues se afecta el orden público, las buenas costumbres y la seguridad ciudadana). Por tales fundamentos OPINA a que se declare INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Claudio Yony Quise Quispe, en contra de la Resolución Gerencial N° 043-2019-MPSRJ/J/GEFC, de fecha 05 de agosto de 2019.

Que, esta administración dando cumplimiento a una de las principales garantías reconocidas por la Constitución Política del Estado; **como es el respeto al ejercicio del derecho de defensa** como expresión del debido proceso o debido procedimiento administrativo conceptuado en el numeral 1.2 del artículo IV del Título preliminar de la Ley N° 27444-LPAG, a través del cual al administrado se le ha garantizado el derecho de audiencia a través del ejercicio de los recursos administrativos previstos en el artículo 218 del TUO de la Ley N° 27444 a lo largo de todo el procedimiento; y, teniendo en consideración que el Derecho Administrativo Sancionador, corresponde a la aplicación de la sanción con criterios objetivos, no interviniendo elementos subjetivos para su determinación, por lo que el incumplimiento de las obligaciones administrativas de carácter municipal, en estricta aplicación del “Principio del Imparcialidad” al momento de imponer sanciones; de tal modo las acciones por las cuales deriva la sanción, es total y únicamente atribuible a la verificación de la infracción en la que ha incurrido.

Además, teniendo en cuenta que la infracción viene a ser toda acción u omisión que signifique incumplimiento de las disposiciones legales que establezcan obligaciones y/o prohibiciones de naturaleza administrativa de competencia municipal, vigentes al momento de su imposición; y siendo la sanción la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo que deriva de la verificación de una infracción cometida por personas naturales o jurídicas, contraviniendo disposiciones administrativas; se tiene que **los argumentos manifestados son de carácter insubsistentes sumándose a ello que no ha aportado elementos de prueba convincentes para la concurrencia de razones de hecho y/o derecho suficiente para variar la decisión impugnada**, concluyéndose que el recurso interpuesto **NO LOGRA DESVIRTUAR LA COMISION DE LA CONDUCTA INFRACTORA**, por lo tanto el recurso de apelación NO cumple con las exigencias establecidas en el artículo 218 del TUO de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, así como tampoco configuran ninguna de las causales de nulidad del acto administrativo señalado en el artículo 10 de la norma acotada.

Que, este despacho en mérito del inciso 6.2 del artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444 LPAG, aprobado mediante D.S. N° 004-2019-JUS, que establece que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto; por lo que **HACEMOS NUESTRO LO ANALIZADO, CONCLUIDO Y RECOMENDADO POR LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA.**

Que, la Administración Pública rige su actuación bajo el Principio de Legalidad, recogido en el numeral 1.1) del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que dispone que “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas” (subrayado agregado); por lo que, en aplicación de este principio, toda actuación de la Administración Pública siempre debe estar enmarcada dentro de una norma legal autoritativa que la faculte a realizar determinada acción administrativa, pues los sujetos de derecho público sólo pueden hacer aquello que le está expresamente permitido y atribuido por las normas que regulan su competencia, lo que debe tomarse en cuenta al resolver la presente petición;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en su Título Preliminar, Artículo IV, numeral 1.7 establece el “Principio de presunción de veracidad”, el mismo que es concordante con el artículo 49 de la misma norma, por lo que se presume que lo contenido en los informes, dictámenes y demás documentos del presente expediente administrativo, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman y que han sido verificados por sus emisores.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN JULIACA

“Capital de la Integración Andina”

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Que, los entes orgánicos responsables antes referidos han evaluado los aspectos normativos y procedimentales respecto a la apelación materia de pronunciamiento, habiéndose emitido la Opinión Legal pertinente con respecto a la Resolución Gerencial N° 043-2019-MPSR-J/GEFC de fecha 05 de agosto de 2019; por lo que esta Gerencia Municipal concluye que se debe proceder a la emisión del acto administrativo respectivo.

Que, estando a los dispositivos legales acotados en los considerandos precedentes, y de acuerdo a las facultades conferidas por el tercer párrafo del artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con los artículos 10, 13 y 202 de la Ley N° 27444, contando con el visado de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Gerencia de Fiscalización y Control;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: DECLARAR infundado el Recurso de Apelación interpuesto por el administrado CLAUDIO YONY QUISPE QUISPE en contra del acto administrativo Resolución Gerencial N° 043-2019-MPSR/J/GEFC de fecha 05 de agosto de 2019, en virtud a los argumentos esgrimidos en la presente Resolución.

Artículo Segundo: CONFIRMAR en todos sus extremos la Resolución de Sanción N° 062-2019-MPSR-J/GEFC, de fecha 31 de mayo de 2019.

Artículo Tercero: ENCARGAR a la Gerencia de Fiscalización y Control proceda a cumplir en notificar al afectado el presente acto resolutivo y cumplido que sea, brindar el trámite que al presente expediente le corresponde.

Artículo Cuarto: REMITIR el presente expediente administrativo a la Gerencia de Fiscalización y Control en originales a folios 119, para su custodia de los actos administrativos de su competencia a fin de la ejecución de lo resuelto mediante la presente Resolución.

Artículo Quinto: DECLARAR que la presente resolución expedida con motivo de la interposición de un recurso de apelación, agota la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto por el inciso a) del numeral 228.2 del Artículo 228° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN ROMÁN
JULIACA

Dr. RICARDO W. ALVAREZ GONZALES
GERENTE MUNICIPAL

CC:
ALDA
SEGE
GEFC
WT
ARCH
REGISTRO GEMU N° 6607 – 2019.